



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C.124/2019

En dos de marzo de dos mil veinte, el secretario de acuerdos, da cuenta al Presidente del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con la promoción registrada con el número 1323 consistente en el proveído de diez de febrero de dos mil veinte dictado por el PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la contradicción de tesis 46/2020. Conste.

Ciudad de México, a dos de marzo de dos mil veinte.

Agréguese a sus autos el proveído de diez de febrero de dos mil veinte dictado por el PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en la contradicción de tesis 46/2020, mediante el cual informa que admitió la denuncia de posible contradicción de tesis 46/2020 de su índice y en virtud de que la resolución emitida en el presente asunto por el Pleno de este Tribunal Colegiado es ahí contendiente solicita se le informe la vigencia del criterio ahí sustentado.

Al respecto infórmese mediante la versión digitalizada que se realice del presente proveído y la sentencia solicitada, se remitan a la cuenta de correo electrónico institucional que indica para tal fin, que el criterio sustentado en la ejecutoria del presente recurso de revisión R.C. 124/2019 por este Tribunal Colegiado se encuentra vigente, en el entendido de que se resolvió por unanimidad de votos, además se ordena el envío VÍA MINTER del archivo digital que contenga la sentencia dictada en el presente recurso.

Lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Por otra parte, toda vez que el presente asunto se encuentra involucrado en la denuncia de una posible contradicción de tesis y se advierte que se ordenó su archivo como susceptible de depuración, sin embargo en atención a que fue motivo de Denuncia de Contradicción de Tesis; por ello, de conformidad con el Capítulo Primero, Punto XVII del Acuerdo General Conjunto número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como lo dispuesto por el Manual para la Organización de los Archivos

1

Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el día **diez de diciembre de dos mil doce**, que en su parte considerativa señala: "Los puntos Vigésimo y Vigésimo Primero del AGC 2/2009 precisan los supuestos en que procede la destrucción o depuración de los expedientes judiciales, y, en su caso, su conservación por ser de relevancia documental; en virtud de ello deberán **conservarse** aquellos expedientes que no se encuentren considerados en tales supuestos; dentro de éstos se ubican los impedimentos, excusas, recusaciones, conflictos competenciales, incidentes de repetición de acto reclamado, incidentes de inejecución de sentencia, inconformidades, entre otros."; se determina que **ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN** y no se ubica en el supuesto de considerarlo como de relevancia documental en términos del Capítulo Tercero, Punto Noveno, fracción IV, del propio Acuerdo.

Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, téstese el sello de la carátula de este expediente y colóquese el que corresponda.

CÚMPLASE.

Así lo acordó y firma la Magistrada Martha Gabriela Sánchez Alonso, Presidenta del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ante el Secretario de Acuerdos Hilario Salazar Zavaleta quien autoriza y da fe. Doy fe.

HSZ/javm

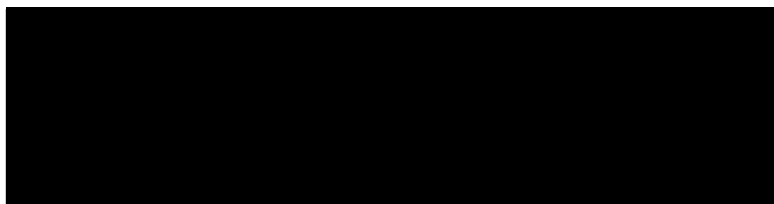




PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R. C. 124/2019.

QUEJOSA Y RECURRENTE:



DOS MEXICANOS

DE LA
LEGISLACIÓN
DEL

Ve. Bo.

Enfrosó.
Licenciada
Patricia
Avila Jasso

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PONENTE:
MAGISTRADO J. JESUS PÉREZ GRIMALDI.

SECRETARIA:
LICENCIADA PATRICIA AVILA JASSO.

Ciudad de México, resolución del Décimo

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,

log. correspondiente al día once de junio de dos mil
diecinueve.

VISTOS, para resolver, los autos del toca R.C.

124/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por la
quejosa



P R, por conducto de su
apoderada Z en contra de la sentencia

dictada en la audiencia constitucional de **veintiséis de marzo de dos mil diecinueve**, por el **Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México**, en el juicio de amparo 164/2019-I, formado con motivo de la demanda promovida por la quejosa; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED],

[REDACTED]
[REDACTED], por conducto de su apoderada [REDACTED], solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juzgado Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor de esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 90 constitucionales, 8, 9, 25 y 63, fracción I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que precisó de la siguiente forma:

"IV. ACTO RECLAMADO. Del C. Juez Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 124/2019

FORMA A-65

3

22

de Justicia de la Ciudad de México se reclama la sentencia interlocutoria dictada en fecha treinta de enero de dos mil diecinueve en el expediente 119/2019, en el que se resuelve el recurso de revocación interpuesto por mi representada, declarándolo como infundado y confirmando el auto de fecha diecisiete de enero de dos mil diecinueve, por medio de la cual la autoridad responsable admite la solicitud de providencias precautorias de retención de bienes, sin embargo, además de fijar una garantía a mi representada ordena que se exhiba garantía de la misma con el apercibimiento de no dar trámite a las retenciones, con completa contravención a lo establecido en disposiciones expresas previstas en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta que el principio de DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS, si bien en el recuro de revocación que fue materia de la resolución que se impugna mediante la presente demanda de garantías no se invocaron los siguientes fundamentos, también es de explorado derecho la autoridad responsable es un perito en derecho y debe tener pleno conocimiento del mismo, así

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
COLEGIADO CIVIL DEL CIRCUITO DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

19
como la obligación de dictar sus resoluciones al derecho positivo vigente aplicable al caso que está resolviendo, por lo que también violenta el artículo 3, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles y 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.

A continuación expuso los que consideró constituían los antecedentes del acto reclamado, los cuales no se reproducen por considerarse innecesario, pero se atiende a su contenido.

SEGUNDO. Admisión de la demanda. El conocimiento de la demanda de amparo correspondió al Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien la registró bajo el expediente 164/2019-I y la admitió a trámite mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve.

TERCERO. Sentencia de amparo. Seguida la secuela procesal, se dictó sentencia en audiencia constitucional de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en los siguientes términos:

"ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a [REDACTED]

[REDACTED]

ESTADOS
PODE
DECIMO T
EN M
PR
CR



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 124/2019

FORMA A-55

5

23

[REDACTED] p [REDACTED] r [REDACTED] p, por conducto de su apoderada legal [REDACTED], contra los actos que reclamó del Juez Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, que se indicaron en el considerando segundo conforme a lo razonado en el punto considerativo sexto de este fallo.

CUARTO. Recurso de revisión. Inconforme con dicha resolución la quejosa [REDACTED]

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
AL TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO
EN MÉXICO

[REDACTED] por conducto de su apoderada [REDACTED] la recurrió en revisión, del que tocó conocer a este Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se admitió por acuerdo de su Presidente de siete de mayo de dos mil diecinueve.

El nueve de mayo siguiente en estado de sentencia, se turnaron los autos al Magistrado ponente para que formulara el proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Colegiado

en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer y resolver del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución, 81, fracción I, inciso e), y 84 de la Ley

de Amparo; 37, fracción IV, 38, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los Acuerdos Generales números 14/2000 y 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la fecha de inicio de las funciones de este Tribunal y a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en virtud de que se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada en audiencia constitucional, por un Juzgado de Distrito del ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción este órgano colegiado.

SEGUNDO. Oportunidad del recurso. El recurso de revisión se interpuso el once de abril de dos mil diecinueve, dentro del término de diez días precisados en el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el que transcurrió del veintinueve de marzo al once de abril del año en curso, cómputo del cual se descuentan los días treinta y treinta y uno de marzo, seis y siete de abril, todos del año en curso, por ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. Sentencia Impugnada. La resolución recurrida se apoyó en las siguientes consideraciones:

"PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 124/2019

FORMA A-55

7

24

México ejerce jurisdicción y es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a que se reclama un acto emitido por una autoridad especializada en materia civil de cuantía menor.

SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado. - - -

Del examen integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado es: - - - Del Juez Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor de la

Ciudad de México la resolución que dictó el treinta de enero de dos mil diecinueve en las

providencias precautorias expediente 119/2019, seguido por la ahora quejosa, en contra de

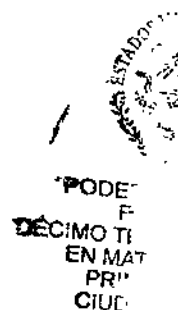
, en la que declaró infundado el



JUDICIAL DE LA
CIÓN
L COLEGIADO
CIVIL DE
RCUITO
MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

recurso de revocación que interpuso la quejosa y confirmó el auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, que dictó el citado A quo, en el que admitió a trámite, las providencias precautorias solicitadas y le fijó una garantía por la cantidad de \$6,655.76 (seis mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 76/100) por concepto de daños y de \$11,840.99 (once mil ochocientos cuarenta pesos 99/100), por concepto de perjuicios que se le pudiese ocasionar a la futura demandada, la cual deberá exhibir en el término de cinco días, mediante fianza o billete de depósito, hecho lo anterior, girará oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para los efectos que se piden, apercibida de doble pago para el caso de incumplimiento (fojas 122 a 130 del tomo I). - - - TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto reclamado al juez responsable (fojas 67 y vuelta), toda vez que así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado, por lo que se tiene plenamente probado. - - - Al respecto es aplicable la jurisprudencia 749, consultable en la página 830, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, tomo II. Procesal Constitucional 1. Común





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 124/2019

FORMA A-55

9

25

Primera Parte-SCJN Sexta Sección-

**Procedimiento de amparo indirecto, Materia(s):
Común, Quinta Época, sustentada por el
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, registro 1002815, de rubro y texto
siguientes:**

**"INFORME JUSTIFICADO
AFIRMATIVO: Si en él confiesa la autoridad responsable
que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste
como plenamente probado y entrarse a estudiar la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". - - -**

**Lo anterior se corrobora con las constancias
que acompañó el Juez responsable, relativas a
copias certificadas del expediente señalado, las
que por estar certificadas por funcionario
público en ejercicio de sus funciones,
constituyen documento público y tienen eficacia
plena en términos de los numerales 129, 197 y
202 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la
materia. - - - La conclusión adoptada se**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

**robustece con la jurisprudencia número 226,
visible en la página 153, del Apéndice del
Semanario Judicial de la Federación,
compilación 1917-1995, tomo VI, Materia
Común, Quinta Época, del Pleno de la Suprema**

73

Corte de Justicia de la Nación, registro 394182, que establece: - - - "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena" - - - **CUARTO.**

Antecedentes del acto reclamado. - - - **1.**

Mediante escrito presentado el catorce de enero de dos mil diecinueve, en la Oficialía de Partes Común Civil Cuantía Menor Oralidad, Familiar y sección Salas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la quejosa [REDACTED]

[REDACTED] S [REDACTED]

[REDACTED] tip [REDACTED]

[REDACTED] por conducto de su apoderada legal [REDACTED]; promovió providencias precautorias de retención de bienes en contra de [REDACTED]

[REDACTED] (fojas 1 a la 11 del tomo

1). - - - 2. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juez Cuarto de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México; en auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve radicó el asunto bajo el número de expediente 119/2019, admitió a trámite las



PODER J
FED
DÉCIMO TRIT
EN MAT
PRIM
CIUD



providencias precautorias solicitadas y fijó a la quejosa una garantía por la cantidad de \$6,655.76 (seis mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 76/100) por concepto de daños y de \$11,840.99 (once mil ochocientos cuarenta pesos 99/100), por concepto de perjuicios que se le pudiese ocasionar a la futura demandada, la cual deberá exhibir en el término de cinco días, mediante fianza o billete de depósito, hecho lo anterior, girará oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para los efectos que se piden, apercibida de doble pago para el caso de incumplimiento (fojas 113 a 118 del tomo I). - - - 3. Inconforme con lo anterior, la quejosa por conducto de su apoderada legal [REDACTED] interpuso recurso de revocación (fojas 119 y 120 del tomo I) y el treinta de enero de dos mil diecinueve, declaró infundado el recurso de revocación que interpuso la quejosa y confirmó el auto impugnado (fojas 122 a 129 del tomo I). - - - La anterior determinación es la que constituye el acto reclamado en el presente asunto. - - - QUINTO. Procedencia del amparo. Previo al estudio de los conceptos de violación, debe

DE LA
N
OLEGIADO
L DEL
ITO
RICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

38

verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; pues de resultar acreditada alguna causa de improcedencia, advertida por el juzgador o mencionada por las partes, habría imposibilidad para examinar la constitucionalidad del acto reclamado. - - - Es pertinente señalar que la improcedencia del juicio de amparo, es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional; es decir, la improcedencia motiva que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por impedirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestros tribunales, la que se analiza de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita, en relación con la jurisprudencia 814, publicada en la página 553,





del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, registro 394770, que es del tenor siguiente: - - -

IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, no aleguen no las partes, cualquiera que sea la instancia. - - - En la especie, no se advierte de

manera oficiosa o que hubieren hecho valer las partes, alguna hipótesis de improcedencia; por ende, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales no se transcriben, al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a hacerlo. - - - **SEXTO.** Análisis del concepto de violación. Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado, y del análisis de lo dispuesto por los artículos 74 a 77 de la

Ley de Amparo, que rigen los requisitos de forma y fondo que deben contener las

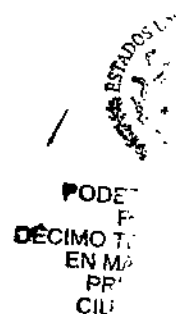
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

sentencias que se dicten en los juicios de amparo, no se advierte que deban contener la transcripción del concepto de violación; por lo que, atento al principio de congruencia que debe cumplir toda sentencia, es suficiente con que se

sinteticen los motivos de queja hechos valer en su único concepto de violación propuesto. - - -

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, consultable en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 164618, de rubro y texto: - - -

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción,





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 124/2019

FORMA A-55

15

23

quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." - - - En tal sentido, la quejosa

señaló que el acto del juez responsable, violó las prerrogativas de legalidad, seguridad jurídica, estricto derecho, fundamentación, motivación y tutela cautelar, como los derechos fundamentales que prevén los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que: - - - a) No se exenta a la quejosa de exhibir la fianza, para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudiese ocasionar a las futuras demandadas. - - - b) La resolución reclamada, carece de fundamentación y motivación. - - - c)

La quejosa es una institución de crédito y forma parte de la administración pública federal, por lo

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

que está exenta de presentar garantías, en los juicios en que sea parte. - - - d) Transcribió los

artículos 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, 1054, 1063, 1176 y 1324 del Código de Comercio, 4 del Código Federal de

Procedimientos Civiles y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y citó diversos criterios de tesis y jurisprudencias. - - -

En ese tenor, son infundados tales argumentos, como se verá a continuación: - - - Los artículos

14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos tenores, en la parte que interesa, son los siguientes: - - - "Artículo 14.

(...) - - - Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (...) - - - "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (...) - - - **Por otra parte, el artículo 17**

del pacto federal, señala: - - - "Artículo 17. (...) - - - Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

(...) - - - **El numeral 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, establece: - - - "Artículo 81 Todas las resoluciones sean**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 124/2019

FORMA A-55

17

29

decretos, autos provisionales, definitivos o preparatorios o sentencias interlocutorias, deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente, de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del tercer día. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás preterisiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos". - - -

De los numerales constitucionales transcritos se advierte que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo,

para que alguien pueda ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, deberá seguirse juicio ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

69

al hecho; de igual forma, para que alguien pueda ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, necesariamente se requiere que exista mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. - - - Se precisa que el artículo 17 constitucional, en su párrafo segundo, entre otras cuestiones establece de manera explícita, el principio de exhaustividad que debe contener toda resolución, pues se señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, entre otras, de manera "completa". - - - Lo mismo acontece en el numeral 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (sic), al prescribir que las resoluciones interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones, resolviendo sobre todos los puntos que se hayan solicitado. - - - Tal precepto establece el principio de congruencia, que en su esencia está referido a que la resolución debe ser congruente no sólo consigo misma, sino también con la litis tal y como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable de: - - - a) congruencia interna, entendida como aquella



PODER JUDICIAL
FEDERACION
DÉCIMO TRIBUNAL
EN MATERIA CIVIL
PRIMER CIRCUITO
CIUDAD DE MEXICO

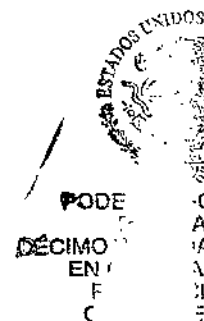


característica de que la resolución no contenga afirmaciones que se contradigan entre sí. - - - b) congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que la resolución no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir alguna que no se hubiera reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio. - - - Por su parte, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en la contestación, y las demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. - - - Del artículo 16 constitucional

DE LA
N
COLEGIO
IL DEL
UITO
EXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

invocado se advierten los requisitos formales de todo acto de autoridad en términos generales son: - - - a) Que se exprese por escrito; - - - b) Que provenga de autoridad competente; y, - - - c) Que funde y motive la causa legal del procedimiento. - - - En ese tenor, el primer requisito, atinente a que el acto de autoridad reclamado se emita en forma escrita, tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias, lo que encierra una verdadera prerrogativa de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, porque obliga a la autoridad responsable a manifestarse de manera tal que resulten indudables las razones en que funda y motiva su proceder, ya que así el gobernado está en oportunidad de defenderse; requisito que se encuentra colmado, con la resolución del Juez responsable de treinta de enero de dos mil diecinueve, por lo que queda claramente demostrada su existencia en forma escrita. - - - Tocante al segundo requisito, relativo a la competencia y que provenga de





autoridad judicial; en principio debe destacarse que por competencia se entiende el límite de la jurisdicción, o sea, el cúmulo de facultades con que cuenta una autoridad para actuar, y en tratándose de órganos jurisdiccionales encomendados constitucionalmente para decir el derecho, se entiende la porción de esa facultad de jurisdicción asignada a un órgano del poder judicial en razón de la materia, fuero y territorio, en el caso particular la resolución del a quo responsable de treinta de enero de dos mil diecinueve, el tema se analiza conforme al marco jurídico aplicable; es decir, de los ámbitos de la legislación que le confieren las facultades necesarias al titular para formular el acto de autoridad; para que tal acto sea válido y lícito se debe fundar en la ley que le brinde competencia a la responsable, lo que en la especie sí se satisfizo, conforme a los artículos 1175, fracción V, 1176, 1189 y relativos del Código de Comercio, tiene competencia para emitir el acto reclamado. - - - Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 10/94, publicada en la página 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 77, Mayo de

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

1994, **Materia(s): Común, Octava Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 205463, que a la letra dice: - - -**

"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculta a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emite, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria." - - - **Precisado lo anterior, debe**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 124/2019

FORMAA-55

23

32

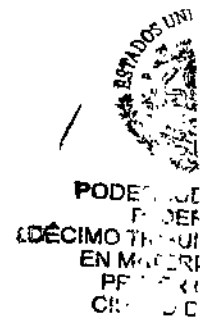
decirse que se colman los tres requisitos en comento. - - - Del contenido del acto reclamado se observa que el Juez responsable cumplió con el derecho humano de fundamentación y motivación consagrado en el artículo 16 de la Constitución Federal. - - - Entendiéndose por lo primero, que ha de señalarse con precisión el precepto legal aplicable al caso. - - - Por lo segundo, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración la autoridad para la emisión del acto reclamado, revistiendo particular importancia, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. - - - Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 266 que dice: - - -

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuadamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y, por lo segundo, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

¹ Visible en la página 1239, Apéndice 2011, Tomo I, Materia Común, Séptima Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 1011558.

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." - - - **Sustenta lo anterior, el criterio sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, derivado de las sentencias de cinco de agosto de dos mil ocho y veintisiete de enero de dos mil nueve, emitidas respectivamente en los Casos: "Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas"; y "Tristán Domoso Vs. Panamá Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas."; de rubro y texto siguiente:** - - - "DEBIDO PROCESO. DEBER DE MOTIVACIÓN ADECUADA. La Corte ha señalado que la motivación "es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión". El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar





debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las "debidas garantías" incluidas en el artículo 8.1 CADH. En el entendido de que el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión." - - - Criterio que se invoca en atención al control de convencionalidad que es de ejercicio obligatorio para todos los órganos de justicia nacional, conforme a los criterios emitidos en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y de rubros siguientes: "CONTROLES DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD. ESTÁN OBLIGADOS A EJERCERLOS TODOS LOS ÓRGANOS DE JUSTICIA NACIONAL PARA GARANTIZAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS." y "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y NO DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL AMPARO DIRECTO. CUANDO SE CUESTIONA LA VALIDEZ DE UNA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL." - - - En

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
COLEGIADO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

cuanto al presupuesto de la fundamentación, el juez responsable citó los preceptos legales que sirvieron de apoyo a su determinación, 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, 1093, 1175, fracción V, 1176 y relativos del Código de Comercio. - - - Relacionado con la motivación, en la resolución referida, el A quo responsable expresó las razones y motivos que le permitieron declarar infundado el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en el que admitió a trámite, las providencias precautorias solicitadas por la quejosa y le fijó garantía por concepto de daños y perjuicios que se le pudiesen ocasionar a las futuras demandadas, sostuvo lo siguiente al contestarle a la quejosa los agravios expuestos ante su potestad, como se verá en el escaneo:



Así, analizados que fueron en su conjunto los argumentos vertidos por la recurrente, el suscrito determina que estos no son suficientes para revocar el auto de fecha diecisiete de enero del dos mil diecinueve.

Lo anterior es así toda vez que, de acuerdo con la fracción V del artículo 1176 del Código de Comercio, y ningún otro numeral del capítulo XI (De las providencias precautorias) del Libro Quinto de la citada legislación mercantil, establecen que, cuando una institución bancaria solicite una retención de bienes como providencia precautoria, no se le deba fijar garantía alguna y, mucho menos, que al fijársela no esté obligada a exhibirla. Asimismo, en los citados preceptos tampoco existen elementos para realizar una interpretación extensiva y concluir que esa fue la intención del legislador.

Por ende, al estar el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito en una ley diversa a la ley mercantil que se comenta, no es susceptible de constituir una excepción a la regla general contenida en la multicitada fracción V del artículo 1176 del Código de Comercio.

Sirve de sustento al presente criterio, por analogía, la tesis de jurisprudencia cuya voz reza: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A OTORGAR GARANTÍA O CONTRAGARANTÍA EN MATERIA DE SUSPENSIÓN, TRATÁNDOSE DE AMPARO DIRECTO." [1]

Esto, por más que, si lo que la presunta actora pretende es que se restrinja el derecho de los presuntos demandados a disponer sobre sus cuentas



bancarias, hasta el monto que pretende reclamar, sin que aún haya iniciado juicio alguno y, todavía más, sin que exista resolución judicial que le haya otorgado el derecho respecto del adeudo que señala, luego entonces, el análisis de los requisitos para la concesión u otorgamiento de las providencias precautorias deben realizarse en estricta observancia de lo dispuesto en el actual texto del artículo 1º de la Constitución Federal en relación con el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, sin que la interpretación de los preceptos relativos deba ser tan amplia que permita exentar la exhibición de la garantía señalada, porque, como ya se mencionó, el Código de Comercio no contempla excepción al respecto y porque, de hacerlo, implicaría atentar contra el principio *pro homine* o *pro persona* de los presuntos demandados al restringirle el derecho citado, sin que medie garantía alguna.

Lo anterior encuentra aún más justificación, porque se reitera, los daños y perjuicios ocasionados por la retención de las cuentas bancarias de los deudores representan la pérdida o menoscabo que a los afectados les ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure el juicio ejecutivo mercantil, que se pretende, del numerario contenido en las cuentas bancarias y cuya cantidad reclama la institución bancaria actuante, esto es, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio principal.

Asimismo, dicha retención también le ocasionaría perjuicios que son las ganancias lícitas que obtendrían los presuntos demandados de tener bajo su pleno dominio el monto que reclama la institución bancaria, durante el tiempo que dure un juicio en promedio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero.

Por otra parte, y en cuanto a que la Ley de Instituciones de Crédito es una ley especial aplicable a los juicios ejecutivos mercantiles por disposición del artículo 1063 del Código de Comercio, dicho argumento tampoco resulta fundado, en atención a lo siguiente.

Como bien señala la recurrente, el artículo 1176 de la Legislación mercantil aludida establece que la retención de bienes decretada como providencia precautoria se regirá, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles; sin embargo, estos se encuentran contemplados en el Título Tercero denominado "De los juicios ejecutivos", y que van del artículo 1391 al 1414 del Código de Comercio, donde, este último numeral señala con precesión que: "Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio

PODER JUDICIAL

CIÓN

para ninguna de ellas.", sin que de lo antes transcrito se advierta el señalamiento de la Ley de Instituciones de Crédito y por ende, se reitera, que esta no le resulte aplicable.

II.- **Conclusión.** En consecuencia, con base en los razonamientos expuestos y tomando en consideración que el proveído de fecha diecisiete de enero del dos mil diecinueve, se encuentra ajustado a derecho, se determina que el recurso en análisis es infundado, por lo que se confirma el auto señalado en todos sus términos.

Bajo esa óptica, el juez responsable no soslayó en la resolución que se reclama, analizar el artículo 17 constitucional que prevé que la administración e impartición de justicia debe realizarse en los plazos y términos que fijan las leyes, lo cual implica que éstos se determinen por el legislador ordinario en uso de su libertad de configuración prescriptiva, siempre y cuando las normas que emita cumplan con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - Lo anterior es así, porque las medidas cautelares (también denominadas providencias precautorias) en general, son los instrumentos que el juzgador puede decretar, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño grave irreparable a los propios justiciables o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso. - - - La finalidad



PODE
F.
DÉCIMO
EN
F
C



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 124/2019

FORMA A-55

29

35

del proceso cautelar, consiste en asegurar el resultado hipotético de una sentencia favorable.

- - - El fundamento que autoriza su empleo se encuentra en la incidencia del tiempo en el proceso, el cual ocupa de manera general un

largo periodo hasta que se llega al reconocimiento del derecho con el dictado de la

sentencia definitiva, en este caso, la lentitud de la justicia se cubre preventivamente, con las

medidas provisionales, pues obran como paliativos de los riesgos que puede implicar la

tardanza en obtener un pronunciamiento jurisdiccional. De este modo, las medidas

cautelares se refieren a las determinaciones adoptadas por el órgano jurisdiccional con la

finalidad de asegurar provisionalmente la efectividad práctica de una eventual sentencia

estimatoria y evitar que durante la tramitación del proceso se produzcan daños y perjuicios de

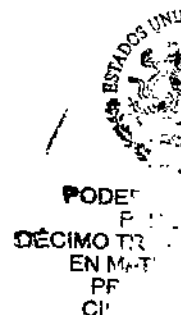
difícil o imposible reparación, por lo que el lapso relativamente prolongado que el proceso tarda

hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de medidas

precautorias, a fin de evitar que la sentencia de fondo sea inútil o ilusoria y, por el contrario, tal

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

decisión tenga eficacia. - - - Así, conforme los fines de las medidas cautelares, debe señalarse que aquéllas tienen diversas características, a saber, las siguientes: - - - a) Provisionales, pues aun y cuando hayan sido decretadas antes o durante el juicio, aquéllas únicamente tienen vigencia hasta la conclusión de ese proceso. - - - b) Accesorias, toda vez que no constituyen un fin en sí mismas, sino que tienen su génesis en un proceso principal. - - - c) Sumarias, dado que por el fin que persiguen deben tramitarse y dictarse en plazos breves. - - - d) Flexibles, ya que pueden modificarse o revocarse conforme las circunstancias que las generan. - - - Cabe destacar que la importancia de las medidas cautelares ha sido tal que diversas jurisdicciones constitucionales de otros órdenes jurídicos y sistemas de enjuiciamiento internacional han reconocido el derecho a la tutela cautelar como parte integral del derecho fundamental a la justicia; verbigracia, el numeral 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

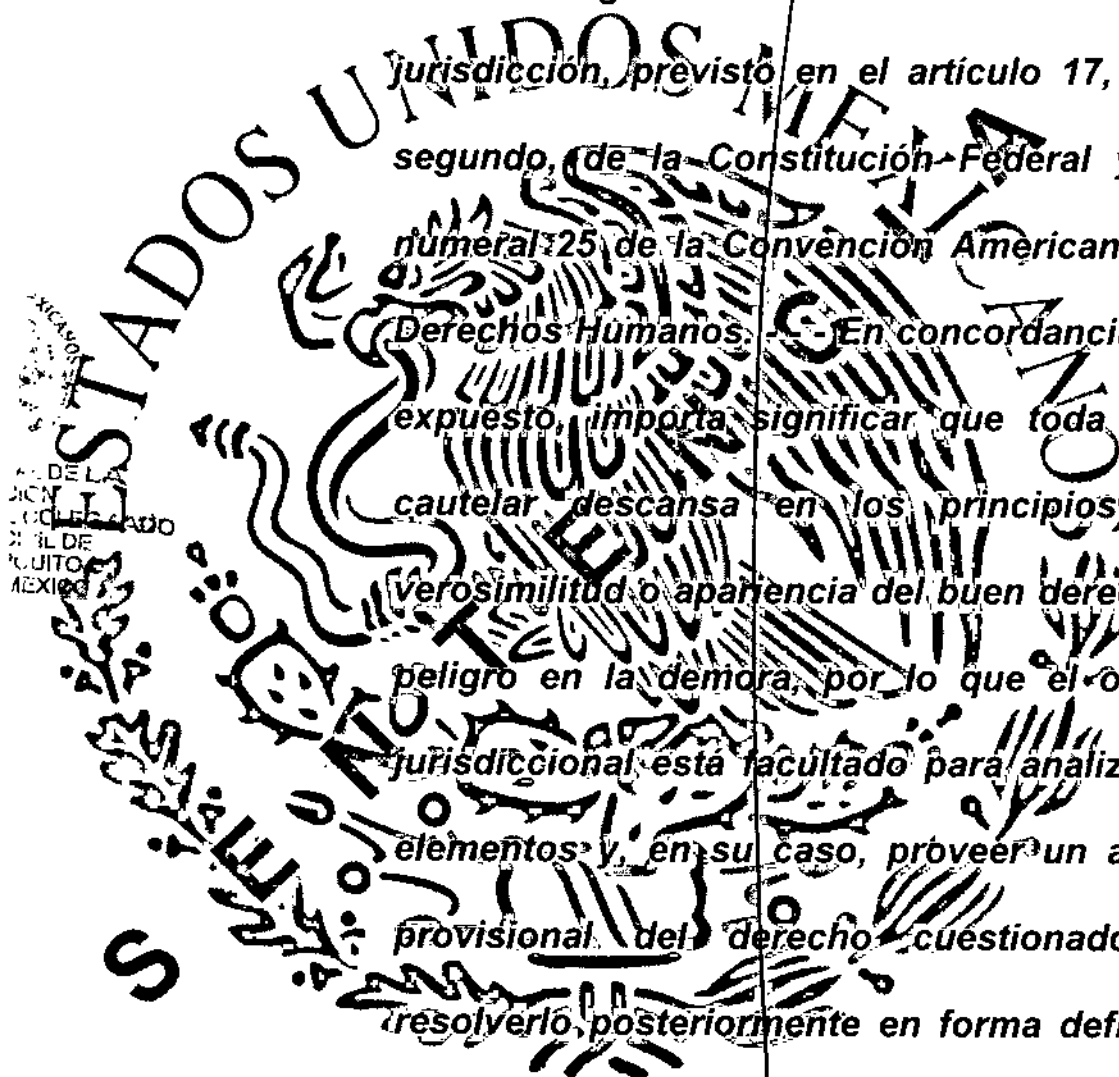
R.C. 124/2019

FORMA A-55

31

36

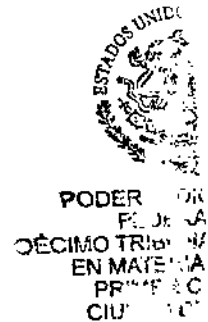
personas, la Corte Interamericana, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. - - - Así, las medidas cautelares tienden a garantizar el acceso efectivo a la jurisdicción, previsto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal y en el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. - - En concordancia con lo expuesto, importa significar que toda medida cautelar descansa en los principios de la verosimilitud o apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, por lo que el operador jurisdiccional está facultado para analizar esos elementos y, en su caso, proveer un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolverlo posteriormente en forma definitiva y permitir, mientras tanto, el desarrollo de ciertas conductas por parte del litigante, que si se le impidieran ocasionarían perjuicio a él y, algunas veces, a terceros. - - - Ahora bien, en el libro V, título I, capítulo XI, del Código de Comercio, el legislador ordinario reguló y previó expresamente las medidas cautelares, a saber, radicación de persona y retención de bienes. - - -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION



A ese respecto, los artículos 1168, fracción II, y 1175 del Código de Comercio, son del tenor siguiente: - - - "Artículo 1168.- En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: - - - (...) - - - II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: - - - a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y - - - b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. - - - En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. - - - Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo." - - - "Artículo 1,175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: - - - I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; - - - II. Exprese el valor de las





prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; - - - III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; - - - IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor (oculte) dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles; y - - - V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte.

- - - El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante. - - - La interpretación armónica de los

preceptos legales transcritos pone de manifiesto que en los juicios mercantiles podrá dictarse como providencia precautoria la retención de bienes, la cual procede cuando existe temor

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes para tales efectos. - - - Asimismo, se desprende que para que proceda la retención de bienes es necesario que el solicitante pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados; manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos sobre los que se practicará la diligencia y señalar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene estos últimos, salvo que se trate de dinero en efectivo o depositado en instituciones de crédito o de otros bienes fungibles; y, garantice los daños y perjuicios que pueda





ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto o su contraparte sea absuelta.

- - - De las premisas apuntadas es de magnificarse la presunción legal establecida

por el creador de la norma, referente a que en los casos en que la retención (secuestro) de

bienes recaiga en dinero, en efectivo o depositado en instituciones de crédito o algún

otro bien fungible, existe el riesgo de que aquellos sean dispuestos, ocultados o

dilapidados, excepción hecha de que el afectado con esa medida cautelar garantice el

monto adeudado. Lo anterior, conduce a concluir que la retención de bienes es una

medida precautoria dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hubiere temor

fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene sus bienes, es decir, determinó que

para que sea procedente la providencia precautoria de que se trata debe fundarse en

que se actualicen los supuestos referidos, lo cual conforme lo previsto en el numeral 1175,

párrafo primero, de la legislación mercantil corresponde acreditar a la parte que solicite la

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

medida cautelar. - - - Conforme a lo anterior, debe significarse que la interpretación relacionada del artículo 1175 del Código de Comercio con la naturaleza de la medida solicitada pone de manifiesto que, para resolver respecto de la retención de bienes, el juez debe atender al peligro en la demora y a la apariencia del buen derecho, pues al consistir las providencias precautorias en el mantenimiento de una situación de hecho existente al momento de iniciar el proceso relativa a preservar un derecho sustantivo, tales elementos deben ser tomados en cuenta para acreditar el temor fundado de resentir el daño a un derecho en caso de no mantenerse esa situación. - - - A ese respecto, debe decirse que la apariencia del buen derecho consiste en una credibilidad objetiva que descarta una pretensión notoriamente infundada o cuestionable, lo que se obtiene a través de un conocimiento superficial a partir de las manifestaciones realizadas por una de las partes en juicio, las cuales se deben encontrar encaminadas a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 124/2019

FORMA A-65

37

39

derecho que sea materia de la litis. - - - Por su parte, el peligro en la demora consiste en la posible pérdida de los derechos de quien solicita la medida, el cual puede actualizarse en virtud de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo del asunto, por lo que la medida cautelar exige un cálculo preventivo de probabilidad respecto del peligro en el retraso que no puede separarse respecto de la verosimilitud que se hace sobre la existencia del derecho que se tutela en el juicio. - - - En otras palabras, para que se conceda una medida cautelar es necesario que exista un principio de prueba que demuestre que quien la solicita cuenta con un derecho sobre la medida que versará esa providencia precautoria, el cual podrá no ser equivalente a las pruebas que definan el derecho y sean analizadas al momento de emitir la sentencia correspondiente; sino que al menos, hagan presumir que cuenta con un derecho para solicitar el aseguramiento de bienes y la radicación de persona. - - - Luego, si las medidas cautelares descansan en los principios de apariencia del buen derecho y peligro en la

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
AL COLEGADO
A CIVIL
DIRECCIÓN
DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

demora resulta inconcuso que el juzgador, a partir de los elementos proporcionados por la parte que solicita la providencia precautoria, puede analizar aquéllos y determinar la procedencia de la medida cautelar. - - - Lo anterior es así, toda vez que si la mera solicitud de una providencia precautoria conllevara a su concesión, se dejaría de lado el propósito que tienen esas medidas de aseguramiento, lo que tendría por consecuencia que se coartara el arbitrio judicial de valorar el peligro en la demora y la apariencia del buen derecho, así como la idoneidad de la medida para hacer efectiva la sentencia que en su momento pudiera llegar a dictarse. - - - Resulta ilustrativa al respecto, la tesis número I.3o.C. 837 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1344, tomo XXXII, septiembre de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: - - - "MEDIDAS CAUTELARES DE ASEGURAMIENTO. PUEDEN SOLICITARSE ANTES O DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO, Y PARA QUE PUEDAN OTORGARSE, EL SOLICITANTE





DEBE DESCRIBIR LA SITUACIÓN DE HECHO EXISTENTE Y EXPRESAR LOS MOTIVOS PARA MANTENERLA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).

Este Tribunal Colegiado modifica la tesis número I.3o.C.631 C, publicada en la página 1723 del Tomo XXVI de la Novena

Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de agosto de dos mil siete, con el rubro: 'MEDIDAS CAUTELARES DE ASEGURAMIENTO.

PARA QUE PUEDAN OTORGARSE, EL SOLICITANTE DEBE DESCRIBIR LA SITUACIÓN DE HECHO EXISTENTE Y EXPRESAR LOS MOTIVOS PARA MANTENERLA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)', en

la que sostuvo que la clase a la que pertenecen las medidas de aseguramiento establecidas en los artículos 384, 385 y 386 del Código Federal de Procedimientos Civiles, esto es, a

las medidas cautelares de las denominadas conservativas, que tienden a mantener el estado de cosas anterior al proceso principal, determina que solamente consistan en mantener la situación de hecho existente, aunque pueden entrañar, entre otras, la suspensión de una obra, de la

ejecución de un acto o de la celebración de un contrato pero, en estos casos, dado su carácter equivalente a una

modificación, se requiere la presentación de la demanda dentro de un plazo perentorio a partir de que se haya

decretado la suspensión, lo que significa que se trata de medidas prejudiciales que, por consiguiente, no pueden ser

solicitadas una vez iniciado el procedimiento. Una nueva reflexión sobre el tema lleva a sostener que, dado su

carácter de medida de aseguramiento, puede ser solicitada

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

antes o durante el desarrollo del procedimiento, ya que por tratarse de una medida cautelar, su previsión obedece a la urgencia de suspender esos actos para evitar una violencia inter partes lo que, desde luego, puede ser de forma previa al sometimiento del asunto ante la jurisdicción estatal, pero no hay obstáculo para que se haga después de iniciado el juicio, porque no hay norma que lo prohíba. Al igual que la generalidad de las medidas cautelares, las de aseguramiento se basan en el peligro en la demora (*periculum in mora*), y en la apariencia o verosimilitud del derecho (*fumus boni iuris*). Esos elementos deben concurrir para el otorgamiento de las medidas de aseguramiento consistentes en el mantenimiento de la situación de hecho existente con antelación al proceso, por lo que es menester que el solicitante de las mismas exprese los motivos que generan el temor fundado de resentir el daño a un derecho si no se mantiene la circunstancia fáctica imperante, misma que debe también describirse, a fin de que el juzgador aprecie si existe el riesgo de afectación al derecho controvertido. No puede ser de otra manera, porque las medidas de aseguramiento, en tanto especie del género cautelar, tienden a evitar que la sentencia pierda su efectividad, en caso de ser favorable a la pretensión formulada, por lo que será en función de esta última que el órgano jurisdiccional debe ponderarla. Así, será la trascendencia de la situación de hecho existente a la afectación del derecho discutido la que determine la pertinencia de conceder o negar la medida, y en tal sentido, la información proporcionada al juzgador resulta esencial.





Estimar lo contrario, significaría que la mera solicitud de las medidas de aseguramiento entrañara su concesión, desnaturalizándose con ello el loable propósito a que sirven tales providencias cautelares, y coartando el arbitrio judicial de apreciar el peligro en la demora, la verosimilitud del derecho y la idoneidad de la medida para lograr la finalidad de hacer efectiva la sentencia que, en su caso, resuelva favorablemente la pretensión del solicitante de la medida." -

Ahora bien, es infundado lo que sostiene la quejosa, en el sentido de que como institución de crédito forma parte de la administración pública federal, esta exenta (sic) a constituir depósitos o fianzas, en los juicios en que sea parte; al respecto, debe decirse que contrariamente a lo que sostiene la quejosa (institución de crédito) de las medidas precautorias normadas por el Código de Comercio, no están exentas de garantizar los posibles daños y perjuicios que se causen (sic), cuando se acuerda favorable la retención de

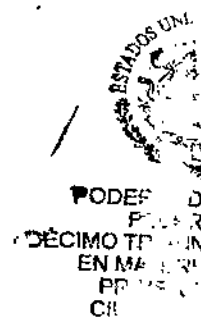
bienes de su contraparte. Ello es así, porque la quejosa perdió de vista que el artículo 1175,

fracción V, del Código de Comercio, es claro al establecer que quien obtenga la retención de bienes en los procedimientos de medidas cautelares reguladas por ese ordenamiento,

AL DE LA
CIÓN
COLEGIO
CIVIL
QUITO
MEXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

habrá de presentar garantía para cubrir los daños y perjuicios que pueda ocasionar esa providencia, conforme al tenor normativo siguiente: - - - "Artículo 1175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: - - - (...) - - - V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. - - - El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante." - - - **De lo anterior, se observa, de un modo similar a lo que prevé la Ley de Amparo en relación con la figura de la suspensión de los actos reclamados, la carga procesal consistente en garantizar los posibles daños y perjuicios constituye un requisito de eficacia de la medida cautelar para quien la obtiene.** - - - Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), visible en la página 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro





2008219, que dice: - - - "DAÑOS Y PERJUICIOS.

FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados

por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que

duraraquel, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado, en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una

condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la

resolución del juicio, esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de

Precios al Consumidor, que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso,

deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el

juicio a la fecha en que se decreta la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para

los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias

lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el

juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación." - - - **Esa carga la asumen todos los que acudan ante la autoridad judicial a solicitar medidas cautelares en materia mercantil, sin distinción con respecto a la calidad de la persona solicitante. - - - De manera que si el legislador federal no estableció en el Código de Comercio, alguna excepción a partir de criterios que atiendan a la naturaleza jurídica, ni la capacidad económica de las personas que las promueven; entonces, es inconcuso que las instituciones crediticias, no están exentas de exhibir la garantía respectiva, cuando sean ellas quienes pidan la retención de bienes. - - - En el juicio natural no cabe la aplicación supletoria del artículo 4 del Código Federal de Procedimiento Civiles; sobre todo, porque la recurrente al ser una institución de banca múltiple no se subsume en la hipótesis del artículo 1° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual**

ESTADO
PODER
P. ER
DÉCIMO TR. UN.
EN MATERIA
PRIMER C
CIUDAD DE



establece: - - - "ARTÍCULO 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. - - - La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada. - - - Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal." - - - No obsta que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, exime a los bancos de constituir depósitos o fianzas legales, pues esa clase de instituciones, también se encuentra obligada a otorgar garantía para resarcir los posibles daños e indemnizar los eventuales perjuicios, que se pudieran generar con la retención de bienes, tratándose de medidas cautelares en materia mercantil. - - - Lo anterior es así, porque conforme al principio de especialidad normativa conocido bajo el aforismo latino: "lex specialis derogat legi generali", el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, es el precepto legal específico que establece la carga de garantizar

AL DE LA
CIÓN
COLECCIÓN DO
CIVIL DE
CULTURA
MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

los daños y perjuicios, no queda subordinado (sic) a la normatividad que regula en general las operaciones y vida interna de los bancos, pues los mandatos del código mercantil, son los que prevalecen en razón de que la garantía de que se habla se encuentra prevista en normas de naturaleza procesal. - - - Ciertamente, es el artículo 1175 del Código de Comercio, pero no el numeral 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, el que de manera precisa establece los requisitos que habrá de cumplir la parte que solicite la media precautoria, el cual no prevé ninguna excepción atendiendo a la calidad de la parte que la solicita, ni a ninguna otra circunstancia. - - - Lo anterior, conduce a establecer que, con independencia de la acreditada solvencia con que cuenta la institución bancaria quejosa, tratándose del procedimiento de solicitud de medidas precautorias, la promovente tiene el deber de garantizar los daños y perjuicios a que se refiere el aludido precepto 1175, en razón de que la ley no distingue. - - - Sin que constituya obstáculo a lo anterior, lo alegado por el banco quejoso, en el sentido de que la Ley de Instituciones de





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 124/2019

FORMAA-55

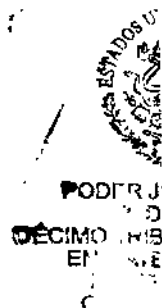
47

44

Crédito forma parte del sistema normativo en materia mercantil y que por ello no le es exigible exhibir la garantía decretada por el juez responsable, porque el artículo 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, con meridiana claridad dispone que esa legislación tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público, y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano. . . . Luego, toda vez que la ley reguladora de los bancos fue incorporada para regir el sistema bancario en México, en todo lo concerniente a la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, así como su sano y equilibrado desarrollo, pero no las medidas cautelares para la retención de bienes de los deudores de la banca. . . . Se concluye que el propósito de aquella ley, es independiente de las reglas procesales, que

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

rigen los juicios y procedimientos mercantiles, en los que un banco sea parte, y no permea en las relaciones, que los bancos entablen con las personas físicas o morales con quienes tenga tratos comerciales. - - - De lo expuesto en párrafos precedentes, no cabe la supletoriedad de la ley bancaria al código mercantil, pues se reitera que en lo que ve a la garantía, para quien pide retención de bienes como medida precautoria, el código en mención, regula suficientemente quienes deben exhibir la garantía, aunado a que no prevé alguna excepción cuando sea un banco quien la solicite, pues si esa hubiera sido, la intención del legislador, así lo habría establecido. - - - En ese sentido, la aplicación de la regla general establecida en el artículo 86 en estudio, que otorga a las instituciones bancarias que no estén en liquidación o en procedimiento de quiebra, la presunción legal de que tienen acreditada solvencia y que por ello no estarán obligadas a constituir depósitos o fianzas legales, no es aplicable en este caso particular, al no estar inmersa en la normatividad específica que regula los procedimientos





mercantiles, como es el Código de Comercio, en el que se impone como requisito de efectividad a cualquiera que solicite una providencia precautoria, que exhiba necesariamente una garantía. - - - En ese tenor, el precepto 86 de la

Ley de Instituciones de Crédito no puede aplicarse de forma complementaria al artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, porque aquél no pertenece a las reglas que prevén la procedencia y los requisitos para el otorgamiento de las providencias precautorias. -

El artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, regula suficientemente a quienes tienen la carga de presentar garantía y excluye la aplicación de las normas generales, como lo es el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, de lo que se sigue que tratándose de

normas procesales, se debe estar a lo que expresamente dispone la primera, por ser la que

regula la procedencia y requisitos del procedimiento de medidas cautelares. - - -

Máxime que a las instituciones de crédito no se les debe reconocer la exención que la quejosa pretende, porque se trastocaría el sistema normativo para privilegiar injustificadamente a

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

un sector financiero frente al universo de deudores, coartando el derecho de éstos a obtener con cargo a la garantía, el resarcimiento de daños y la indemnización de los perjuicios generados por la retención de sus bienes, para el caso de que el banco se abstenga de promover el juicio tendente a obtener el cobro del adeudo o las resultas del litigio le sean desfavorables a la institución crediticia. - - - De esa manera, el Juez responsable estableció las hipótesis normativas y las razones consideradas para resolver en los términos en que lo hizo, las cuales se ajustaron a la legalidad, pues tales argumentos resultan claros y explican la determinación indicada; de ahí lo infundado, del motivo de disenso en ese aspecto. - - - Ilustra lo anterior la tesis de jurisprudencia I. 4o.A. J/43², sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro 175082, que dice: - - - "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de



² Visible en la página 1531, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006., Novena Época.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 124/2019

FORMA A-55

51

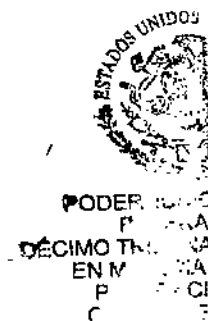
46

legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y, posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción."

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Aunado, a que el juez responsable atendió primordialmente a los principios fundamentales del proceso, de invariabilidad de la litis una vez fijada, el de congruencia y exhaustividad, resultando infundado el argumento que la quejosa hizo

sobre ese aspecto, e inaplicables los criterios de tesis y jurisprudencias que invocó. - - - Es aplicable la jurisprudencia VI.3o.A. J/13, visible en la página 1187, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, registro 187528, que dice: - - - "GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos





jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas." - - -

Bajo esa óptica, el juez responsable, en la resolución de treinta de enero de dos mil diecinueve, no vulneró los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, de la que se advierte, que atendió al cúmulo de facultades con que cuenta para actuar y formular el acto de autoridad; lo cual motivó, fundó y satisfizo, conforme los artículos 1 y 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, 1175, fracción V, 1176, 1189 y relativos del Código de Comercio; de ahí lo infundado de su motivo de disenso. - - - En consecuencia, atento a las razones expuestas,

lo procedente es negar el amparo solicitado por la quejosa."

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CUARTO. Agravios. La recurrente expresó los agravios que consideró conducentes, los cuales se tienen aquí por reproducidos para los efectos legales procedentes.

QUINTO. Estudio de los agravios. Son ineficaces los motivos de inconformidad de la recurrente.

De la lectura integral de su impugnación se advierte que pretende, en esencia, se determine que está relevada de la exhibición de la garantía prevista en el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, porque dice que resulta aplicable supletoriamente a dicho precepto el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito que contiene una presunción en su favor (acreditada solvencia) que permite se configure la excepción a la regla contenida en aquel precepto.

Lo anterior es infundado, porque como determinó el juez federal, en la especie resulta inaplicable lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito de manera supletoria a la fracción V, del artículo 1175 del Código de Comercio.

En la sentencia recurrida se indicó que la quejosa perdía de vista que el artículo citado en segundo término era claro en establecer que quien obtuviera la retención de bienes en los procedimientos de medidas cautelares reguladas por ese ordenamiento habría de presentar garantía para cubrir los daños y perjuicios que pudiera ocasionar esa providencia, lo que se regulaba en modo similar a lo previsto en la Ley de Amparo respecto de la suspensión de los actos reclamados, en el sentido de la carga procesal consistente en

POD
DECIMO
EN
C



garantizar los posibles daños y perjuicios que constituye un requisito de eficacia de la medida cautelar para quien la obtiene.

Que esa carga la asumían todos los que acudieran ante la autoridad judicial a solicitar medidas cautelares en materia mercantil, sin distinción respecto a la calidad de la persona solicitante, de manera que si el legislador federal no había establecido en el Código de Comercio alguna excepción a partir de criterios que atendieran a la naturaleza jurídica ni a la capacidad económica de las personas que solicitaban dichas medidas, entonces era inconcuso que las instituciones crediticias no estaban exentas de exhibir la garantía respectiva cuando solicitaran la retención de bienes.

Señaló que no era obstáculo lo previsto por el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues conforme al principio de especialidad normativa "*Lex specialis derogat legi generali*", el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, era el precepto legal específico que establecía la carga de garantizar los daños y perjuicios, sin quedar

subordinado a la normatividad que regulaba en general las operaciones y vida interna de los bancos, pues los mandatos del código mercantil eran los que prevalecían en razón de que la garantía de que se hablaba se encontraba prevista en normas de naturaleza procesal.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Esta determinación es correcta, porque este tribunal federal considera que en los casos en que resulte procedente decretar una providencia precautoria por actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 1168 del Código de Comercio³, la parte que lo solicite debe cumplir, necesariamente, con el requisito de eficacia a que se refiere la fracción V del artículo 1175 del citado ordenamiento⁴, consistente en que garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte.

Es así, porque de acuerdo con el Código de Comercio aplicable en la especie, la eficacia de las providencias precautorias queda condicionada a que se cumpla este requisito indispensable, siendo este ordenamiento el que regula de manera específica los

³Artículo 1168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: - - - I. Radicación de persona. cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de este Código; - - - II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: - - a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y - - b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. - - - En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. - - - Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo.

⁴ Artículo 1175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: - - - (...) - - - V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. - - - El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante.

ESTADOS UNIDOS
PODER J
DEC
DECIMO
EI
AT
MA



requisitos que habrá de cumplir la parte que solicite la medida precautoria, sin que prevea excepción alguna en este aspecto, específicamente por la calidad de la persona promovente.

Entonces, con independencia de la acreditada solvencia con que cuenta la institución bancaria quejosa, tratándose del procedimiento de solicitud de medidas precautorias, el solicitante está obligado a garantizar los daños y perjuicios a que se refiere el artículo 1175 citado.

Más aún que no puede constituir un obstáculo a lo anterior, lo alegado en el sentido de que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito forma parte del sistema jurídico general en materia mercantil y, que por ello resulta aplicable, dado que por estar previsto en una ley diversa al Código de Comercio no es susceptible de constituir una excepción a la regla general contenida en este ordenamiento.

En principio, es importante destacar lo previsto en los artículos 1º y 86 de la ley citada⁵, que establecen respectivamente, que dicho ordenamiento tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito; la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito; las actividades

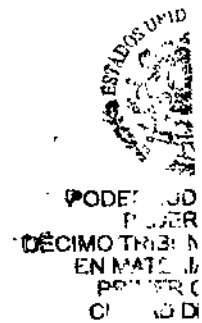
⁵Artículo 1o. La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano."

"Artículo 86. Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos."

y operaciones que las mismas podrán realizar; su sano y equilibrado desarrollo; la protección de los intereses del público; y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano; que mientras los integrantes de este sistema no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos.

Conforme a tales preceptos, la Ley de Instituciones de Crédito fue creada para regular el sistema bancario mexicano en todo lo concerniente a la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, así como su sano y equilibrado desarrollo.

Por tanto, al ser su finalidad distinta a la regulación de la forma en cómo deberá verificarse un procedimiento ante autoridad judicial, debe considerarse independiente de las reglas procesales que rigen los juicios y procedimientos en los que un banco sea parte, pues son éstas las que específicamente regulan de modo cómo habrá de verificarse el derecho de acceso a la jurisdicción por los gobernados (norma especial).





Así, tratándose de normas procesales se debe estar a lo que expresamente dispongan al momento de regular la procedencia de los juicios o procedimientos de que se trate y de sus requisitos de eficacia.

Sobre esa base, es dable concluir que la regla general prevista en el artículo 86 citado no es aplicable, al no estar inmersa en la ley especial que regula los procedimientos mercantiles, como es el Código de Comercio, es decir, al no pertenecer al sistema normativo que regula la procedencia y requisitos para el otorgamiento de las providencias precautorias (caso concreto).

Lo anterior se robustece porque la quejosa pretende la aplicación de una excepción, que precisamente por ese carácter debe estar prevista expresamente en el propio ordenamiento que prevé la regla general, pues sólo así podrá entenderse que el legislador consideró una excepción a este caso concreto a través de una distinción particular. De considerarlo en sentido contrario, por vía de interpretación, se ampliaría el régimen privilegiado a casos concretos en los que no se previó expresamente.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

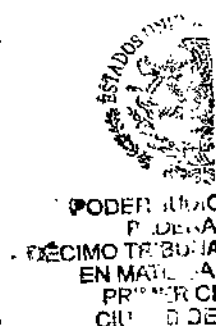
Derivado de las razones expuestas, no puede considerarse que se reúna el requisito a que se refiere la jurisprudencia que invoca la quejosa de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro:

"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE", consistente en que existe insuficiencia en la norma aplicable por falta total o parcial de reglamentación necesaria, máxime que debe partirse de la base de que el artículo 1175, fracción V, no contiene una insuficiencia en su regulación sino que tiene una finalidad encaminada a proteger el equilibrio procesal de las partes, teniendo en cuenta que su base está constituida por un aparente derecho de la solicitante de las medidas, lo que puede ocasionar daños y perjuicios a su contraria y que, por tanto, debe garantizarse.

Precisamente, teniendo en cuenta que se trata de una garantía, el hecho de que en su oportunidad pueda cumplirse con la obligación correspondiente no la sustituye, porque precisamente se trata de una medida de naturaleza preventiva, no de la obligación como tal, que finalmente podrá o no configurarse.

En tal virtud, considerando que en la especie resulta inaplicable la excepción prevista en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito es que son infundados los motivos de inconformidad examinados y que resultan inaplicables los criterios que invoca para apoyarlos.

Ante lo infundado de los agravios de la inconforme es procedente confirmar la sentencia recurrida y negar la





protección constitucional solicitada.

Por lo expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 93 de la Ley de Amparo; se:

RESUELVE

PRIMERO. Se confirma la sentencia impugnada, dictada por el Juez Decimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 164/2019-I.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a [REDACTED]

[REDACTED] en contra del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los Magistrados que integran el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, y MARTHA

GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, siendo Presidente y Ponente el primero de los nombrados ante el Secretario de Acuerdos, licenciado Hilario Salazar Zavaleta, que autoriza y da fe. Doy fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI.

MAGISTRADO

VÍCTOR HUGO
DÍAZ ARELLANO.

MAGISTRADA

MARTHA GABRIELA
SÁNCHEZ ALONSO.



EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. HILARIO SALAZAR ZAVALETA.

Esta hoja pertenece a la parte final de la resolución dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el recurso de revisión civil R.C. 124/2019, interpuesto por el quejoso [REDACTED]

[REDACTED] En el fallo se resolvió:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

R.C. 124/2019

FORMA A-55

63

52

PRIMERO. Confirmar la sentencia impugnada. **SEGUNDO.**
Negar el amparo solicitado.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. HILARIO SALAZAR ZAVALETA.

El suscrito Secretario de Acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, **HACE CONSTAR** que con fecha diecisiete de junio de dos mil diecinueve, y dentro del término que señala el artículo 184, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se firmó el engrose de la sentencia dictada en el recurso de revisión civil R.C.

124/2019. Doy fe.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS

LIC. HILARIO SALAZAR ZAVALETA.

PAJ/nggs

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

53

En 18 JUN 2019, se notificó por lista la resolución anterior a las partes, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. Doy Fe.

ACTUARIO JUDICIAL
LIC. EFREN ROSAS APASOLC

En 19 JUN 2019, surtió sus efectos legales la notificación a que se refiere la razón que antecede, conforme a la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo. Doy fe.

ACTUARIO JUDICIAL
LIC. EFREN ROSAS APASOLC

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CIVIL
ALCOLOLADO
A CIVIL EN EL
CIRCUITO
DE MÉXICO

Esta hoja corresponde a las razones de notificación de la resolución de 11 JUN 2019, dictada dentro del expediente R.C. 124/2019- interpuesto por

[REDACTED] **UPO** [REDACTED]
CONSTE. ACTUARIO JUDICIAL
LIC. EFREN ROSAS APASOLC



Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: RespuestaAcuerdo.pdf
Secuencia: 3144115

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

[illegible]